



6.

**Emergencia y declive
de las FARC-EP en la
subprovincia del Sumapaz,
años 1990-2004**



Emergencia y declive de las FARC-EP en la subprovincia del Sumapaz (1990-2004)

Por Jorge Andrés Baquero Monroy*

DOI: <https://doi.org/10.54118/controver.vi218.1252>

Resumen: Las dinámicas socioespaciales del conflicto armado en parte de la región del Sumapaz, para los años 1990-2004, estuvieron caracterizadas por altos grados de intensidad en la violencia, cuando mayoritariamente las FARC-EP, el Ejército Nacional y minoritariamente los grupos paramilitares desarrollaron una serie de repertorios violentos que convirtieron a este territorio colombiano en un teatro de guerra. A pesar de lo anterior, este es un texto que intenta ilustrar solo el papel de las FARC-EP en el suscrito territorio, toda vez que presenta un universo de sucesos y dimensiones explicativas que van desde lo ideológico, lo político, lo estratégico, hasta el utilitarismo y los beneficios individuales, entre otras situaciones. Así mismo, es un análisis de rupturas y continuidades sobre el papel de las FARC-EP en la mencionada subprovincia, en donde se evidencia la adhesión social de la población hacia la guerrilla, pero también la resistencia y la resiliencia hacia el poder de las FARC-EP.

Palabras clave: conflicto armado, Sumapaz, 1990-2004, FARC-EP, violencia.

Emergence and Decline of the FARC-EP in the Subprovince of Sumapaz (1990-2004)

Abstract: The socio-spatial dynamics of the armed conflict in part of the Sumapaz region for the years 1990-2004 were characterized by high degrees of intensity in violence, where mainly the FARC-EP, the National Army and to a lesser extent the paramilitary groups developed a series of violent repertoires that turned this territory into a theater of war in Colombia from the nineties. Despite the above, this is a text that tries to illustrate only the role of the FARC-EP in the subscribed territory, since it is a universe of events and explanatory dimensions that range from ideological, political, strategic, utilitarianism, individual benefits, among others. Likewise, the signed text is an analysis of ruptures and continuities on the role of the FARC-EP in the sub province, where the

* Investigador del grupo Organización, Gestión y Políticas Públicas (REDES), adscrito a la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) de Colombia; licenciado en ciencias sociales y magíster en administración pública. Correo electrónico: jorgebaqueromon@hotmail.com

social adherence of the population towards the guerrillas is evidenced, but also the resistance and resilience towards the power of the FARC.

Keywords: armed conflict, Sumapaz, 1990-2004, FARC-EP, violence.

Cómo citar este artículo: Baquero Monroy, Jorge Andrés (2022). Emergencia y declive de las FARC-EP en la subprovincia de Sumapaz (1990-2004). *Revista Controversia*, (218), 219-264.

Fecha de recepción: 31 de julio de 2021

Fecha de aprobación: 25 de noviembre de 2021

Introducción

La región del Sumapaz está ubicada en el flanco occidental de la cordillera Oriental colombiana. La componen los municipios de Cabrera, Venecia, Arbeláez, Tibacuy, Pandi, Pasca, Fusagasugá, Silvania y San Bernardo, en el departamento de Cundinamarca; la Localidad 20 de Bogotá; y los municipios de Cunday, Villarrica e Icononzo en el departamento del Tolima (Londoño, 2011, pp. 17-20). Este territorio ha sido ampliamente estudiado desde las ciencias sociales por parte de personas como Rocío Londoño (2011), Elsy Marulanda (1991), Laura Varela (2010), José Jairo González (1986), Varela y Duque (2011), Alfredo Molano (2016), Pierre Gilhodes (1974) y Marco Palacios (1986), entre otras.

Desde los aportes de los académicos mencionados anteriormente es posible evidenciar cuatro tendencias históricas en la región del Sumapaz: en primer lugar, una profunda influencia de la hacienda y economía cafetera en los primeros años del siglo xx; en segundo lugar, una importante influencia del Partido Liberal, el Partido Comunista y tendencias políticas agraristas en la primera mitad del siglo xx; en tercer lugar, una constante tensión social y emergencia de conflictos agrarios acompañados de autodefensas campesinas en los años cincuenta; y, en cuarto lugar, una estigmatización estatal al considerar al Sumapaz como “nave nodriza” de las FARC-EP.

Figura 1. Provincia del Sumapaz



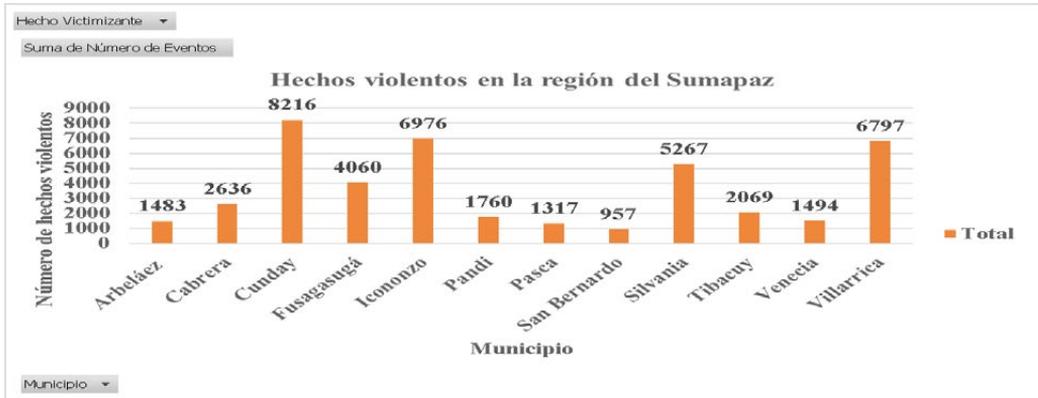
Fuente: esacademic, 2014.

En buena medida estas tendencias históricas permitieron que las FARC-EP utilizaran el territorio en la segunda mitad del siglo XX como un lugar de tránsito para garantizar la conexión entre los departamentos del Meta, Tolima, Huila y Cundinamarca. Con el paso del tiempo, este tránsito se convirtió en presencia constante, incidencia social y política, y realización de hechos violentos (figura 2) que agudizaron el conflicto armado en la región.

Los datos del Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas no discriminan los responsables de los hechos victimizantes, de modo que en este texto se hace referencia únicamente a los territorios de menor presencia e incidencia de grupos paramilitares y presencia mayoritaria de las FARC-EP en los años

1990-2004, en concreto, los municipios de Pasca, Cabrera, Venecia, Arbeláez, San Bernardo y la Localidad 20 de Bogotá.

Figura 2. Hechos violentos en los municipios de la región del Sumapaz



Fuente: elaboración propia con base en datos del Registro Único de Víctimas.

Este análisis sobre el papel de las FARC-EP en la subprovincia del Sumapaz por los años noventa se divide en dos bloques analíticos: el primero —Auge y adhesión social de las FARC-EP (1990-1996)—, es un estudio de la manera como esta organización se consolidó allí; y el segundo —Contraofensiva guerrillera y escalamiento del conflicto (1997-2004)—, presenta su retroceso en la presencia e incidencia en los territorios antes especificados.

Auge y adhesión social de las FARC-EP (1990-1996)

Desde la séptima conferencia de las FARC-EP en 1982, esta organización afianzó las estrategias políticas y militares¹ para ganar terreno como un

1 Según Carlos Medina Gallego y su colega Santos Alonso Beltrán, antes de la séptima conferencia las FARC-EP se comportaban como una guerrilla marginal, prag-

actor político armado y desplegar golpes militares de mayor impacto en las regiones. En efecto, los años ochenta fueron el periodo de activación del “plan estratégico de toma del poder”, lo que significó que, si bien los caminos de salida pacífica a la guerra eran una posibilidad, la organización estuviera firmemente concentrada en la ingeniería militar necesaria para lograr dicho propósito (Medina, 2009).

De este modo, la decisión organizacional de las FARC-EP sobre la toma del poder en Colombia significó una intensificación en la presencia de la guerrilla en la región, en clave de un copamiento territorial a largo plazo. No hay que olvidar que la toma de Casa Verde² por parte del gobierno Gaviria, en el año 1990, causó su repliegue hacia el páramo de Sumapaz, donde más tarde se crearían los frentes 51, 53 y 55 (Ávila, 2011).

Haciendo hincapié en el argumento anterior, la salida por el municipio de Pasca tenía la intencionalidad de conectar con las veredas del sur de Fusagasugá, para establecer un corredor de milicia, contingentes armados, intendencia, dinero, entre otros recursos hacia Bogotá y ciudades intermedias como Girardot y Sibaté, en Cundinamarca, y Melgar, en Tolima (Usaquén y Tinjacá, 2018).

mática y con relacionamientos sociales hacia los campesinos muy similares a los desarrollados por las guerrillas liberales de los cincuenta, sin embargo desde 1982, en materia política la estrategia de las FARC-EP estuvo enmarcada en acercar a las comunidades periféricas de Colombia hacia sus ideales, orientar a la comunidad en procesos políticos y patrocinar la organización y acción colectiva de la población civil. Así mismo, en materia militar se inclinaron por una orientación jerárquica de operaciones militares, una distribución estratégica del territorio por parte de los frentes y la consolidación de un modelo financiero de la guerra.

- 2 Campamento y cuartel general de las FARC-EP por los años de la negociación de paz con los gobiernos de Belisario Betancourt y Virgilio Barco. Estaba localizado en el municipio de La Uribe, en el departamento del Meta, y desde allí se impartieron las órdenes del Estado Mayor Central de las FARC-EP hasta 1990.

En el mismo sentido, la salida por el municipio de Cabrera tenía el objetivo de conectar con el municipio de Pandi, en Cundinamarca; con las veredas del sur de Icononzo, Villarrica y Cunday en el departamento del Tolima; y por ahí mismo con el noroccidente del país.

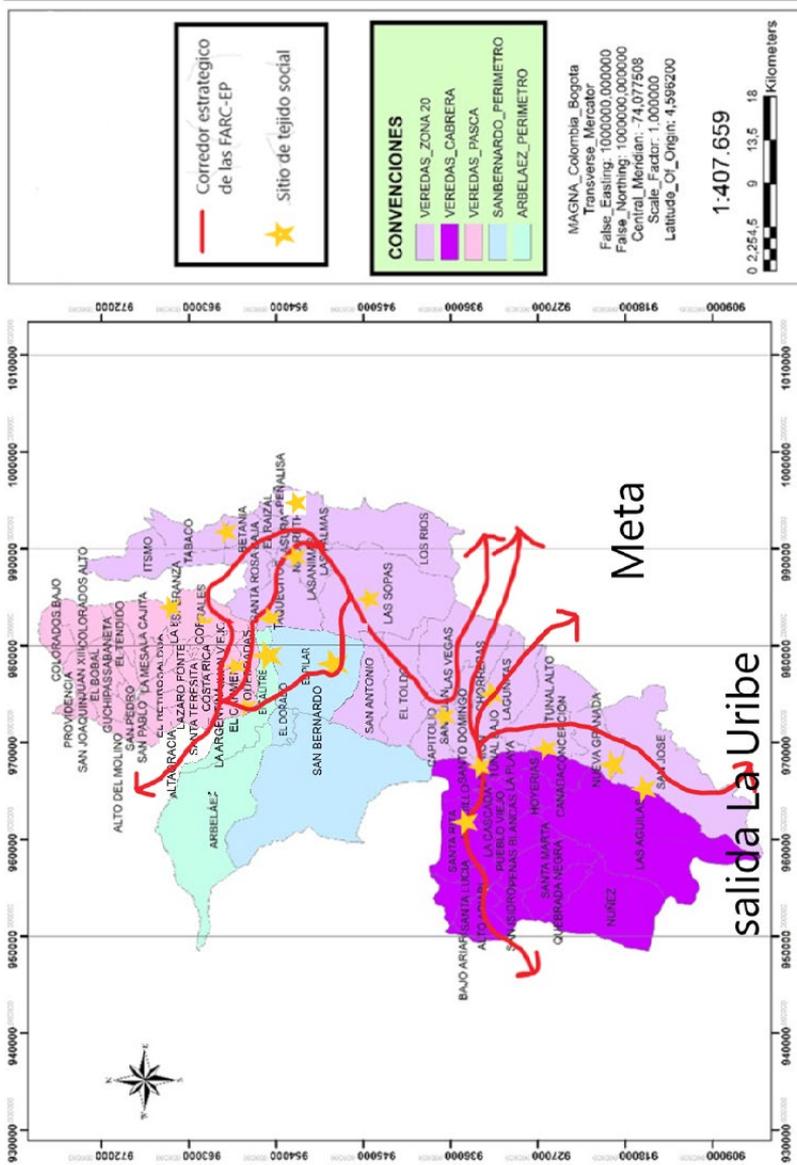
En cuanto al corredor por el alto Sumapaz (La Unión, San Juan, Las Sopas, Nazareth y las Ánimas) y el agreste páramo de Sumapaz (parque nacional natural), hay que decir que este ofreció mayor facilidad para el reaprovisionamiento, atención de heridos, reagrupamiento de combate, formación política y demás tareas de la organización armada, mientras que por otro lado permitía la conexión con el departamento del Meta y todo el sur del país (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006).

El *corredor estratégico* de las FARC-EP en la subprovincia, para los años 1990-1993, tuvo un grado importante de estabilidad, a pesar de que en ocasiones esta era interrumpida por la presencia del Ejército Nacional. Por su parte, la guerrilla le apostó a la clandestinidad para movilizarse por el páramo de Sumapaz.

La explicación de las dificultades para que el Ejército Nacional diera golpes contundentes contra las FARC-EP tuvo tres aristas: una, la inexistencia de comandos de la Policía Nacional en los municipios de Cabrera y la Localidad 20 de Bogotá; dos, el reducido patrullaje del Ejército y la Policía Nacional; y, tres, la debilidad institucional. Además, para los años 1990-1993 las carencias en materia de seguridad, justicia, atención social y desarrollo económico concluyeron en establecer zonas periféricas, regionales y rurales de Colombia donde la institucionalidad tenía poca presencia (Tirado, 1990).

Así las cosas, en los años ochenta e inicios de los noventa sucedió un robustecimiento político militar de las FARC-EP en la subprovincia, por cuenta de un incremento sustancial en las labores políticas y militares

Figura 3. Corredor estratégico FARC-EP en Sumapaz, 1990-2004



Fuente: elaboración propia con base en mapa de Dick Rodríguez.

de la milicia guerrillera, que rápidamente les permitió consolidar unidades militares, incrementar la “guerra de guerrillas” en el territorio y, en consecuencia, tener un contexto apto para controlar la zona y parcialmente desarrollar un gobierno territorial cerca de los cascos urbanos, mientras que en las zonas rurales (veredas) tenían la posibilidad de impartir educación política, y realizar labores de reentrenamiento y adiestramiento militar.

Sin embargo, aunque es posible observar el crecimiento de las FARC-EP a partir de las directrices organizacionales guerrilleras, vale la pena preguntarse: ¿Esto les fue suficiente para consolidarse política y militarmente en el territorio? Como respuesta es válido decir que, por un lado, las FARC-EP históricamente habían construido relaciones de respeto y camaradería con la población campesina, mucha de ella cercana ideológicamente al Partido Comunista (García, 2017); y, por otro, su posicionamiento político se debió al uso de violencia legitimadora, intercambio de servicios, utilitarismo, bienestar social e instrumentalización de la violencia y la identidad (Wood, 2010). Buen ejemplo de lo anterior fueron los tejidos sociales insurgentes construidos por medio del uso de repertorios violentos en contra de presuntos ladrones de ganado, homosexuales, trabajadoras sexuales, consumidores de marihuana, entre otros grupos poblacionales (Sánchez, 2019).

“En el municipio estaba prohibido robar, sobre todo robar ganado, los que no hacían caso [acataban] los mataban y eran colgados en la carretera, donde todos podían ver porqué los habían matado () todo el mundo sabía que ellos robaban ganado y quién los había matado [las Farc-Ep].” (Firacative, 2019).

Con el paso del tiempo el trabajo político de las FARC-EP hacia la población civil trascendió de las buenas relaciones establecidas en el pasado, pues además de tejidos sociales en lugares como la Localidad 20 de Bogotá, Pasca y Cabrera (*El Tiempo*, 1992), fueron ganando terreno en

toda la subprovincia a partir del acercamiento con los liderazgos en juntas de acción comunal, juntas veredales, sindicatos agrarios y partidos políticos que tenían problemas de convivencia en las diferentes veredas.

“Recuerdo que, en una fiesta en la vereda, unos muchachos se pusieron a pelear, la comunidad los amarró a un palo toda la noche () eso lo habían aprendido de la guerrilla, la comunidad sabía que la guerrilla los respaldaba.” (Martínez, 2017).

En consecuencia, hubo un grado importante de simpatía hacia las FARC-EP por parte de los pobladores de las veredas más alejadas de la modernidad que ofrecía el casco urbano municipal. Buen ejemplo de ello fueron las veredas de Quebradas, Corrales, Juan Viejo, La Esperanza y El Carmen en Pasca; El Salitre en Arbeláez; El Pilar en San Bernardo; Núñez, Las Águilas, Tunal viejo, La cascada y La Unión en Cabrera; y, por supuesto, en gran parte de la Localidad 20 de Bogotá. A contraccorriente, cerca de los cascos urbanos se concentraban repertorios violentos como la extorsión, el secuestro, la amenaza y el daño a la propiedad privada. Dado lo anterior, allí se presentaba un grado importante de antipatía hacia las FARC-EP y sus simpatizantes.

En síntesis, las FARC-EP, a inicios de los años noventa, se consolidaron como el nuevo orden del Sumapaz, reemplazando en buena medida muchas funciones estatales como justicia, seguridad, organización del sistema sociopolítico, resolución de conflictos sociales, entre otras. En efecto, en su intento de edificar contraestados³ en la subprovincia, hi-

3 Argumentaciones como las de Michael Mann revelan que el modélico Estado racional weberiano tiene profundas carencias para desarrollarse en la práctica. El Estado tiene un control limitado de la violencia, y el poder y la legitimidad, de hecho, en varios territorios los ejercen los actores privados (muchos de ellos en armas), quienes determinan cuestiones como la tributación, las decisiones públicas, la coerción legítima, la justicia, entre otras. De allí que analistas políticos como Mario Aguilera consideren que, en lugares como Colombia, las FARC-EP fungieron en la

cieron que el Estado colombiano fuera perdiendo poder en términos de presencia e incidencia, sin embargo, no es posible afirmar que hubo una “ausencia del Estado” o un “Estado a cargo de las FARC-EP”, más bien hubo concentraciones y desconcentraciones del poder legítimo.

A pesar de lo anterior, se puede aseverar que en municipios como Cabrera y en la Localidad 20 de Bogotá, el poder de las FARC-EP fue tolerado por los liderazgos locales institucionalizados del poder público (servidores públicos), es decir, la sociedad se inclinaba hacia el apoyo a sus contraestados, mientras que en municipios como Pasca, Venecia y San Bernardo la resistencia a su poder político-militar por parte de los poderes institucionales y las élites locales generó la respuesta autoritaria y violenta de este grupo.

De este modo, en los municipios de la subprovincia en donde los contraestados de las FARC-EP funcionaban marginalmente, la guerrilla “disciplinó” a la comunidad produciendo una numerosa cantidad de repertorios violentos hacia la sociedad civil y sus enemigos de guerra. Por ejemplo, a través de las tomas guerrilleras a cascos urbanos, los robos y las afectaciones a la institucionalidad, los paros armados, los asesinatos de agentes de la Policía Nacional, las amenazas, la implementación de órdenes sociales insurgentes, entre otros. En la tabla 1 se exhiben algunos de los repertorios violentos más visibles en el espacio y en el tiempo, como las tomas guerrilleras en los municipios estudiados.

Como se deduce de la tabla 1, los blancos de las tomas guerrilleras fueron las instituciones bancarias, estatales y militares, probablemente en un intento de disputar la legitimidad y suprimir el poder del Estado.

segunda mitad del siglo xx como Estados paralelos, *contraestados* o *contrapoderes*, los cuales determinaron la vida pública, recaudaron impuestos, generaron bienestar social, justicia y seguridad.

Tabla 1. Tomas guerrilleras por parte de las FARC-EP en la subprovincia del Sumapaz

#	Fecha	Hecho	Descripción	Lugar
1	13 de noviembre de 1991	Hostigamiento frustrado	Desde las 7:00 p. m. realizaron hostigamientos hacia la cabecera municipal de Pasca, siendo repelidas por el Ejército Nacional. Este hecho generó afectaciones a fachadas de infraestructuras privadas y públicas. No se presentaron heridos ni muertos.	Pasca
2	22 de octubre de 1992	Toma del casco urbano	En la noche, 22 guerrilleros realizaron hostigamientos en la cabecera municipal de Pasca. La toma duró tres horas y generó afectaciones a infraestructuras privadas y públicas.	Pasca
3	26 de diciembre 1992	Hostigamiento frustrado	Ataque a una patrulla de la Policía Nacional en inmediaciones del casco urbano. Fueron asesinados los agentes de policía Miguel Ángel Giraldo y Jairo Vargas, mientras otro resultó herido.	Cabrera
4	21 de febrero de 1994	Toma del casco urbano	Realizada en horas de la noche, tuvo como resultado el asesinato de un agente de la Policía, el robo de dinero de la Caja Agraria ^a y presiones a otros funcionarios públicos.	Venecia
5	19 de julio de 1994	Toma del casco urbano	Más de cien guerrilleros de los frentes 52 y 25 atacaron el municipio, afectando gravemente la fachada de la estación de Policía, asesinaron a dos agentes de la Policía y dejaron en shock a otros cuatro. Después de ello, el municipio quedó sin presencia policial por varios años.	Pasca
6	19 de febrero de 1994	Toma del casco urbano	Hostigaron la estación de Policía de la vereda La Aguadita, y asaltaron y dinamitaron el peaje del Alto de San Miguel en la antigua vía. En medio de la toma, los guerrilleros se atrincheraron en casas cercanas a la estación de Policía y de allí dispararon <i>rockets</i> y granadas, al tiempo que otros lo hacían desde camionetas.	Fusagasugá
7	21 de septiembre de 1994	Toma del casco urbano	Guerrilleros del Frente 55 atacaron el puesto de Policía. Los agentes fueron apoyados por tropas de contraguerrilla del Ejército. En el desarrollo del hecho hurtaron 2 millones a la Caja Agraria, una mujer falleció y fueron heridos dos civiles.	San Bernardo

^a Hoy en día Banco Agrario de Colombia. Fuente: elaboración propia con base en datos del Cinep, registros de prensa y archivos locales.

Esta violencia indiscriminada fue aplicada de forma intermitente o en ocasiones únicas, generando que la población rápidamente se les aliara por miedo o por utilitarismo.

Así las cosas, las FARC-EP aplicaban, por un lado, violencia dosificada en las veredas y, por otro, violencia indiscriminada en los cascos urbanos. Según Kalyvas (2010), el que un actor armado no ejecute violencia indiscriminada puede ser síntoma de su fortaleza en el territorio, pues no lo necesita para ser obedecido. Cabe aclarar que las FARC-EP no tenían ningún problema en recurrir nuevamente a la violencia indiscriminada hacia algún actor institucional que le disputara legitimidad y poder, así fuera de manera tenue.

Por otro lado, es posible decir que detrás de las tomas guerrilleras en el Sumapaz no hay una lógica racional infalible, ya que en varios momentos de los años noventa las FARC-EP coexistieron con funcionarios públicos como docentes, alcaldes, concejales, promotores de salud, entre otros. Dicho de otra manera: en ocasiones coexistían las FARC-EP, el Estado, la sociedad y el mercado, mientras en otras la acción estatal era imposibilitada por los actores armados (González, 2017).

Es importante anotar que las tomas guerrilleras también fueron resultado de una directriz nacional de las FARC-EP, como quedó plasmado en su octava conferencia (1993), donde se alentó a los diferentes frentes a pasar hacia la *guerra de movimientos*, fortalecer la presencia de la subversión en la cordillera Oriental para la toma del poder, expulsar la institucionalidad en los lugares que dominaban y no permitir elecciones (Medina, 2009, pp. 151-159).

Trasladadas las tomas guerrilleras a los cascos urbanos, se dio una agresión débil por parte de las fuerzas armadas en la subprovincia. La Brigada XIII del Ejército Nacional logró causar algunas capturas y bajas a combatientes en el territorio (*El Tiempo*, 1994). Sin embargo, estas acciones militares no fueron sostenidas en el tiempo.

La razón por la cual el Estado colombiano no arremetió con todo el poder militar como en el caso de las “repúblicas independientes”⁴ o la Operación Casa Verde es aún indeterminada. Sin embargo, en las entrañas de las FARC-EP se sostuvo en su momento que el interés del Ejército Nacional y en general del Gobierno central no estaba enfocado en recuperar el control en la subprovincia, sino que, por el contrario, radicaba en que la insurgencia no volviera a tener movilidad en su antiguo centro de operaciones en La Uribe, departamento del Meta (Murillo, 2017).

En síntesis, las estructuras político-militares de los frentes 51, 52, 55 y 26 que operaban en las inmediaciones del páramo de Sumapaz lograron repartirse estratégicamente el territorio, aprovechando los poderes contraestatales ganados en el pasado. A continuación se señalan algunos liderazgos de las FARC-EP que conformaron estas estructuras por los años mencionados, las cuales coexistieron con el Estado para coordinar actividades como la administración de necesidades públicas en materia de seguridad, justicia, convivencia, medio ambiente y construcción de vías.

El poder político y militar de las FARC-EP en la subprovincia por los años 1994-1995 pasó de una presencia estratégica y clandestina a una estancia constante, visible y legitimada. Muchas de estas lógicas de guerra eran derivadas del trabajo político militar de algunas de sus unidades como el Frente 26, que procedían del departamento del Meta y concentraban sus esfuerzos en el fortalecimiento de la red de auxiliadores y en el trabajo político con el campesinado del páramo de Sumapaz (Verdad Abierta, 2015). Cabe aclarar que, así fueran tomas guerrilleras los repertorios violentos, estos eran mucho más pensados en clave política,

4 Expresión con la que Álvaro Gómez Hurtado se refirió desde el Congreso de la República, en los años sesenta, a las poblaciones de El Pato, Guayabero, Riochiquito, Marquetalia y Sumapaz, debido a que, según él, en estos territorios no se respetaba la soberanía del Estado colombiano por ser focos comunistas. Más tarde el presidente Guillermo León Valencia atacaría dichos territorios. Véase en Señal Colombia (2015). Discurso Guillermo León Valencia. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=W1Gk3QIZjXk>

lo que significó que en buena medida tuvieran “costos” aceptables en aras de construir legitimidad y adhesión social.

A su vez, el Frente 25, para inicios de los años noventa, estuvo al mando de Germán Amado Porras, alias “Cipriano”. Esta estructura operó al suroccidente del Tolima y el suroccidente de Cundinamarca, y tuvo bastante incidencia en los municipios de Villarrica, Cunday e Icononzo (Tolima), y Venecia y Cabrera (Cundinamarca), donde la guerrilla se concentró en dosificar la violencia, hacer trabajo político, formar contraestados y legitimarse en el territorio, restándole importancia al “ataque militar hacia enemigos” (Funcionaria Pública de Cabrera, 2019).

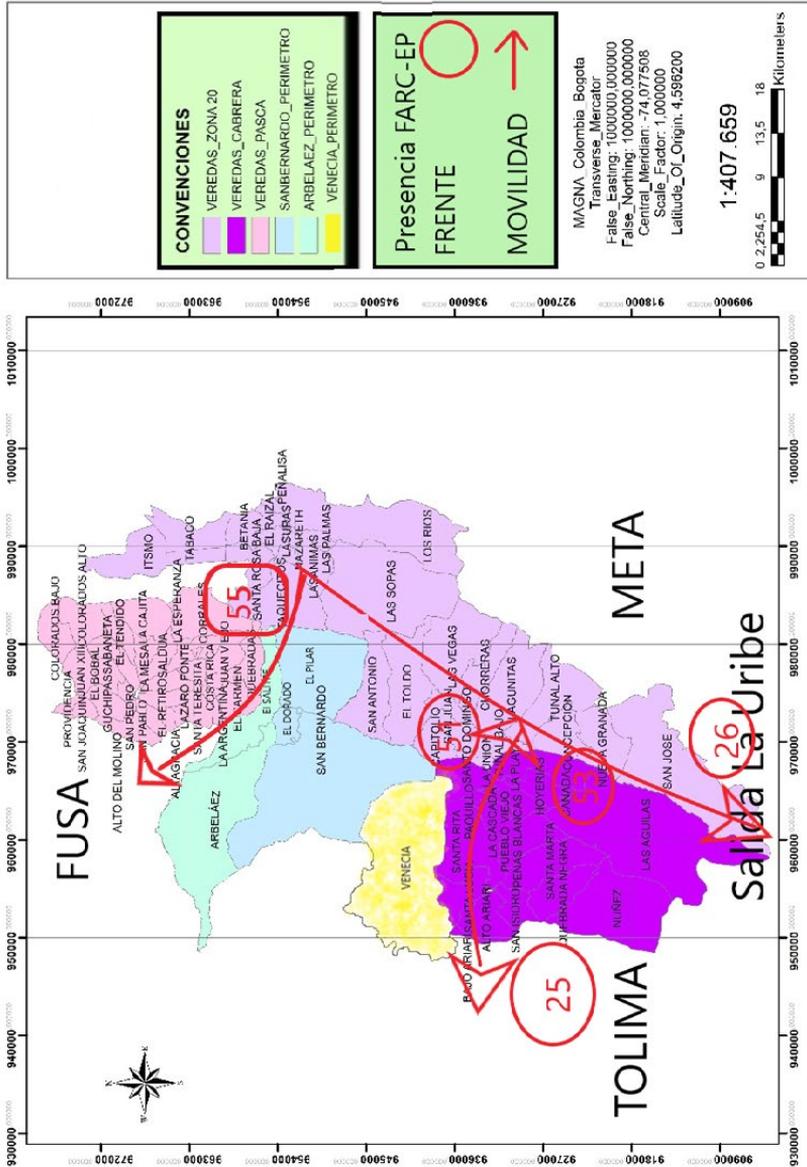
Para la época, el Frente 51 estuvo al mando de alias “Alexander”. Operó al suroccidente de Cundinamarca en Cabrera, y otras veredas de los municipios de La Uribe, El Calvario y Restrepo en el Meta. En intermediación con el páramo de Sumapaz actuó el Frente 52 o Frente Juan de la Cruz Varela, a cargo de alias “el Loco Iván”, que para la época tenía principalmente tareas móviles.

El Frente 55, a cargo de “Nelson Robles”, tuvo presencia en los municipios de Cabrera, Pandi, Venecia, San Bernardo y el sur de la Localidad 20 de Bogotá. Entre otras cosas, este fue el de mayor incidencia en los lugares que daban salida al municipio de Fusagasugá y sus acciones militares fueron las de mayor impacto en la subprovincia.

En suma, las estructuras armadas mencionadas respondían al mando del Bloque Oriental, así que muchas de las acciones que las FARC-EP desarrollaron en la subprovincia desde los años ochenta hasta mediados del 2005 eran planeadas, coordinadas o por lo menos informadas al Estado Mayor del Bloque Oriental.

El año 1996 fue un tiempo de enormes transiciones para el Sumapaz, ya que la capacidad militar y coercitiva de las FARC-EP sobre la población

Figura 4. Frentes de las FARC-EP subprovincia del Sumapaz, 1990-1996



Fuente: elaboración propia con base en mapa de Dick Rodríguez.

civil generó que se profundizará el secuestro, la extorsión y el boleteo⁵, sobre todo en municipios sin presencia policial. Al desbordarse este tipo de delitos en el territorio, se alertaron las autoridades departamentales sobre las implicaciones de la situación de orden público en la zona (Corporación Nuevo Arcoíris, 2007). Al parecer este tipo de repertorios violentos, que afectan principalmente a los notablatos locales, son los que más generan reacción estatal.

En consecuencia, la gobernadora de Cundinamarca de la época, Leonor Serrano de Camargo, decidió emprender la reconstrucción de las inspecciones y comandos de Policía Nacional en los municipios de Cabrera y Pasca, mientras solicitó a la Brigada XIII del Ejército Nacional mayor presencia en las zonas rurales (Asamblea de Cundinamarca, 1996).

A propósito de la gobernadora Leonor Serrano de Camargo, esta se caracterizó por promover una política de mano dura contra la subversión. Su lenguaje para referirse al problema del conflicto armado en Colombia y su impacto en el departamento dejaba observar un malestar institucional sobre la situación de control y regulación social que tenían las FARC-EP en la subprovincia del Sumapaz (CCAJAR, 2007).

Por consiguiente, las estructuras de las FARC-EP fueron atacadas sistemáticamente, mientras avanzaban las construcciones de los comandos de Policía Nacional en los municipios de Pasca y Cabrera. Además, sus relaciones con la comunidad habían desmejorado notablemente, pues no tenían el mismo poder contraestatal de los años anteriores; no podían desarrollar acciones de seguridad, justicia, bienestar social y trabajo político como antes debido al asedio militar, mientras que los hurtos y extorsiones hacia la población aumentaban de manera importante (*El Tiempo*, abril 1995).

5 Acción en la que los agentes armados informan a la comunidad, como, por ejemplo, el señalamiento personalizado de miembros indeseables en la sociedad.

En resumen, el conflicto social armado en la subprovincia del Sumapaz de 1990 a 1996 tuvo cuatro particularidades que lo caracterizaron. En primer lugar puede ser entendido, dentro de una matriz de análisis de las dinámicas territoriales del conflicto⁶, como producto de una lógica mayoritariamente política orientada a robustecer las bases sociales y militantes, e incrementar los apoyos logísticos necesarios para desarrollar el “plan de toma del poder”, en correspondencia con la directriz de la octava conferencia de realizar una ofensiva militar sobre Bogotá hasta tener una ciudad aislada, desabastecida, con sus municipios vecinos “asfixiados” y en medio de protestas populares (Ospina, 2008), inclinando sus propósitos hacia el control territorial y la intensificación de la violencia.

En segundo lugar, para las FARC-EP la subprovincia se fue transformando de un territorio de tránsito a uno de retaguardia, pues se insertaron efectivamente en ella creando identidad y adhesión social (Vásquez, 2017, p. 154). Las razones para ello fueron principalmente el histórico buen relacionamiento con la población civil, el poco interés Estatal de tener el monopolio de la fuerza, y la transferencia de servicios entre la guerrilla y la población en asuntos de seguridad, justicia y bienestar.

En tercer lugar, “el plan de toma de poder” planteado en los años ochenta trazaba como reto lograr dicho objetivo a mediados de los años noventa y, si llegase a fallar, construir un “Estado de beligerancia” en el sur del país (Aguilera, 2013). Esto evidenció falta de congruencia en el accionar de las FARC-EP en la subprovincia, pues mientras por un lado profundizaron las bases sociales, por el otro estas bases sociales, simpatías y militancias sufrían la presión violenta del propósito de “asfixiar” los municipios vecinos a Bogotá.

6 La idea de incluir los diferentes territorios dentro de una matriz de análisis con tres pilares de observación: la lógica de la guerra, la finalidad del conflicto en el territorio y la escala de análisis del desarrollo socioespacial del conflicto armado es autoría del sociólogo Teófilo Vásquez Delgado.

En cuarto lugar, los elementos previamente señalados permiten sostener que la intensidad del conflicto armado se mantuvo debido a una inclinación más hacia la esfera política que hacia la avaricia por rentas primarias e ilegales, por ejemplo, la circulación de dineros de la coca que venían del sur del país y el pago de secuestros. Sin embargo, esto último tiene más de un grado de realidad. De este modo, es obvio que para estos años el curso del conflicto tuvo motivaciones económicas y políticas, aunque en intensidades distintas. Por ende, no es sencillo distinguir claramente el momento en el cual el conflicto en la subregión del Sumapaz fue estrictamente por agravio (pretensiones políticas)⁷ o por avaricia (rentas ilegales).

Contraofensiva guerrillera y escalamiento del conflicto (1997-2004)

El retroceso en la presencia e incidencia de las FARC-EP en la subprovincia del Sumapaz se presentó entre los años 1997-2004. Varias aristas de las dinámicas socioespaciales del conflicto armado cambiaron sustancialmente desde 1997, y pueden sintetizarse en cuatro aspectos: las internacionales, las nacionales, las regionales en clave del “plan de toma del poder” y las locales, más relacionadas con eventos que se salieron de las racionalidades institucionales, organizacionales y micromotivacionales de la guerra.

Disgregando lo anterior, a nivel internacional se dio un aumento sustancial en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, lo que significó una mayor financiación de parte de los Estados Unidos de América a Colombia para este propósito. En perspectiva histórica, los dos países han sedimentado buenas relaciones, en gran parte basadas en el campo

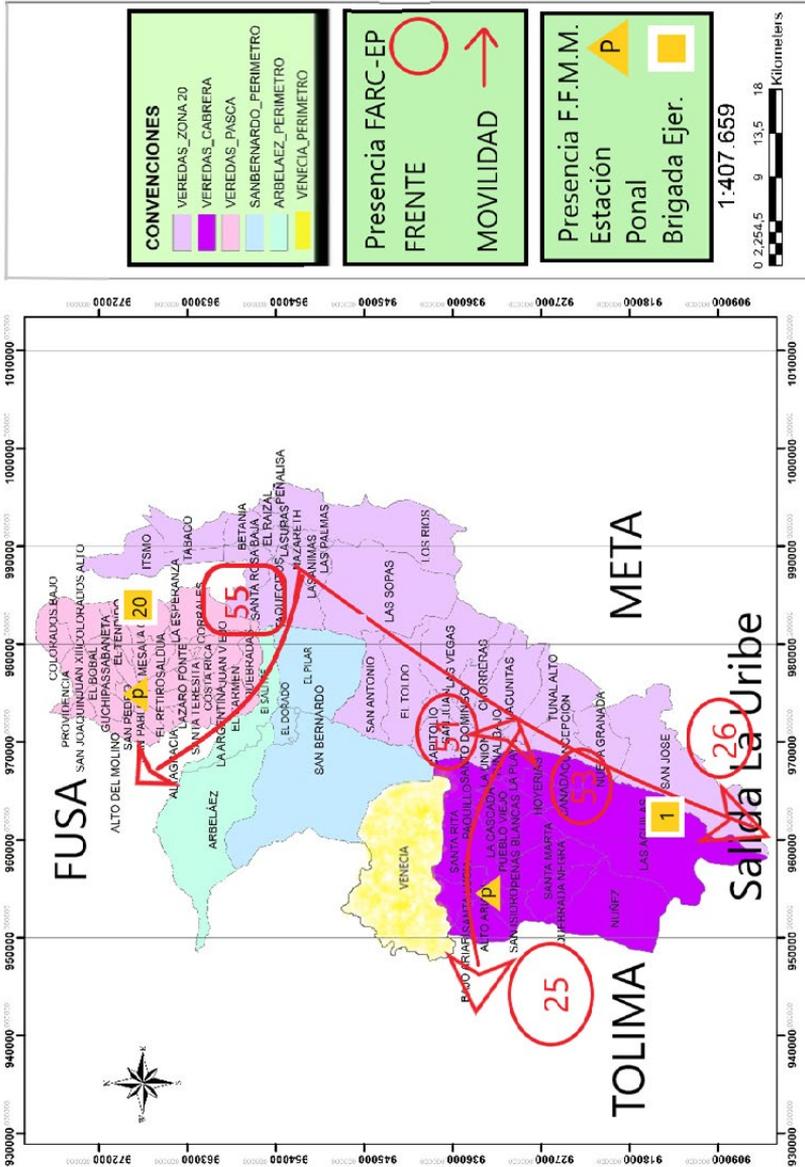
7 Para Paul Collier y Anke Hoeffler (2004), existen exclusivamente dos motivaciones para que *señores de la guerra* entren y persistan en ella: la captura de rentas ilegales y primarias, y las pretensiones políticas e ideológicas, aunque después de la caída de las URSS la guerra se inclina hacia lo económico.

militar. Como resultado, en Colombia la política pública en materia de seguridad se intensificó con movilización de recursos hacia la lucha contra grupos guerrilleros y cultivos de coca, decantada en un importante apoyo logístico materializado en el Plan Colombia y posteriormente en el Plan Patriota.

A nivel regional se presentaron también circunstancias que caracterizaron el curso del conflicto social armado en la subprovincia. Al efecto es posible señalar que estos años fueron los de mayor arremetida de las fuerzas militares en contra de las FARC-EP. De hecho, los combates y las acciones móviles de la Brigada XIII del Ejército Nacional se intensificaron en los municipios de Pasca, Cabrera, San Bernardo, Venecia, Arbeláez y la Localidad 20 de Bogotá. Buenos ejemplos de lo anterior son la instalación de un batallón de infantería en el municipio de Fusagasugá; la construcción de batallones de alta montaña, particularmente los batallones #1 y #20 de las Fuerzas Armadas; y la construcción entre 1996 y 1997 de los comandos de Policía en los municipios de Pasca y Cabrera (CAR Cundinamarca, 2018).

Es necesario aclarar que en la Localidad 20 de Bogotá la intensidad del conflicto armado tuvo un cierre posterior al año 2004, por varias razones: por un lado, este territorio está ubicado en el páramo de Sumapaz, por tanto no ofrecía las condiciones geográficas para que el Plan Patriota se desarrollara con la misma agilidad que en el resto del territorio; por otro lado, la adhesión social a la guerrilla era mayor que en los demás municipios de la subprovincia, pues el uso dosificado de la violencia por parte de esta no había generado tantas antipatías como en los lugares donde la violencia, la extorsión y el secuestro fueron indiscriminados. En consecuencia, las operaciones militares de la Policía y el Ejército Nacional fueron mucho más tardías, menos efectivas y débilmente apoyadas por la población civil, siendo los años 2007 y 2008 los picos de mayor violencia en la Localidad.

Figura 6. Actores armados subprovincia del Sumapaz, 1996-2001



Fuente: elaboración propia con base en mapa de Dick Rodríguez.

Por otro lado, siguiendo las directrices político-militares de la octava conferencia, por los años 1997-2003 las FARC-EP estaban constituidas por más de 17 000 hombres en armas y realizaban acciones bélicas contra servidores públicos de alto valor político⁸ (Pécaut, 2008, p. 41), lo cual sugiere que estaban incorporando vertiginosamente a nuevos guerrilleros, posiblemente con mayores destrezas en el ámbito militar que en el político.

Con base en lo anterior, es dable decir que la nave nodriza de las estructuras de las FARC-EP en el Sumapaz fue el Bloque Oriental, el cual se destacó por haber sido una de las más violentas (Cadena, 1999). De este modo, las estructuras de las FARC-EP presentes en el Sumapaz para 1997-2004 se caracterizaron por el accionar mediado por una violencia mucho más indiscriminada, intensa, constante y voluminosa (Ejército Nacional, s.f.), lo que a cuentagotas incrementó la cantidad de enemistades.

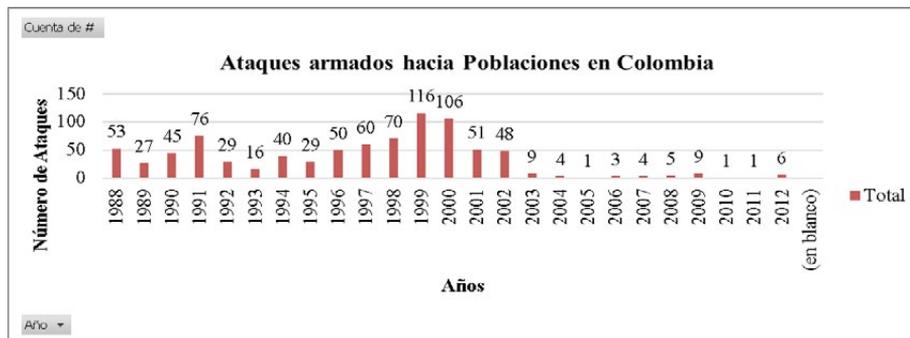
Del mismo modo que se fueron intensificando las acciones militares de las FARC-EP a nivel nacional en ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá (*Tiempo*, junio 1995), sus buenas relaciones con la sociedad civil fueron disminuyendo, sobre todo en territorios donde la guerrilla había logrado construir *contraestados* y retaguardias.

De este modo, la subprovincia del Sumapaz no fue la excepción a la hora de presentar violencia indiscriminada. Dos oleadas de tomas guerrilleras se desarrollaron en los municipios del territorio, las cuales sucesivamente fueron generando más antipatía en los habitantes del casco urbano respecto a las FARC-EP, y una respuesta militar y estatal

8 Según Pécaut (2008), 12 alcaldes y 60 concejales fueron asesinados, 309 alcaldes solicitaron relevo en sus funciones, otros 300 se tuvieron que resguardar en guariciones militares, otro centenar manejaron las administraciones municipales a distancia, 1800 concejales renunciaron y 172 se encontraban sin presencia policial.

fuerte, todo ello en el marco de sus *contraestados* significativamente debilitados y con menos legitimidad en la población.

Figura 7. Ataques armados hacia poblaciones en Colombia



Fuente: elaboración propia con base en datos del Grupo de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional.

Tabla 2. Tomas guerrilleras por parte de las FARC-EP en la subprovincia del Sumapaz

#	Fecha	Hecho	Descripción	Lugar
1	09 de mayo de 1997	Toma del casco urbano	Entre 120 y 200 guerrilleros de los frentes 25, 53 y 55 atacaron la Caja Agraria del municipio, la estación de Policía e instalaciones institucionales. Durante los hechos fueron asesinados con tiros de gracia el gerente municipal del banco, Carlos Eduardo Mogollón; el agente de la Policía, Luis Abel García Pachón; y los ciudadanos Julio César y Marlón Fiqueredo. Tres policías resultaron heridos, y las señoras Benedicta Borda y Edruin Ortiz denunciaron afectaciones en la fachada de su casa.	Venecia

(Continúa)

#	Fecha	Hecho	Descripción	Lugar
2	20 de agosto de 1997	Toma del casco urbano	Mientras 16 patrulleros de la Policía veían el partido de fútbol Colombia-Bolivia, 250 hombres de los frentes 52 y 55 se tomaron el municipio y asesinaron al agente Rufino Rivas Palma y al patrullero John Jairo Zapata; los patrulleros Robinson Cardona Cortés, Jairo Julián Guerrero Zárate, Mauricio Vargas Pulido y Jesús María Cortés resultaron heridos. A su vez, asaltaron la Caja Agraria y destruyeron la mayoría de locales del centro de la población. A las 3:00 a. m. la toma guerrillera terminó, sin embargo, aproximadamente a las 10:00 a. m. una mina explotó quitándole la vida a un campesino de 33 años.	Cabrera
3	4 de enero de 2001	Hostigamiento frustrado	Miembros del Frente 55 hostigaron el municipio. El ataque, desarrollado por cerca de 30 guerrilleros, se produjo hacia las 10:00 a. m. con el objetivo de robar el Banco Agrario. Diez agentes que custodiaban el comando de la Policía controlaron el asalto y el saqueo de la entidad financiera. No se presentaron daños de consideración ni heridos ni muertos.	San Bernardo
4	19 de junio de 2001	Hostigamiento frustrado	Guerrilleros de los frentes 55 y Abelardo Romero incursionaron en el casco urbano del municipio. Utilizaron cilindros cargados con explosivos contra la estación de Policía, la Alcaldía, la Fiscalía y las oficinas de Bancafé, de donde hurtaron 29 millones de pesos. Se reportaron tres civiles heridos y dos policías asesinados: el patrullero Pablo Emilio Castellanos Martínez y el intendente Omar Alexis Acevedo Isidro.	Arbeláez

Fuente: elaboración propia con base en datos del CINEP, registros de prensa y archivos locales.

En las tomas de Cabrera y Venecia en 1997, a pesar de la intensidad y violencia indiscriminada, la guerrilla no logró desplazar del casco urbano a la Policía Nacional, como sí ocurrió en los hechos de los años 1992 y 1994. Así mismo, las tomas guerrilleras del 2001 en San Bernardo y Arbeláez fueron infructuosas para las FARC-EP, pues solo les representaron una oportunidad para hurtar dinero de las entidades bancarias.

Las tomas guerrilleras de 1992 y 1994 tenían como propósito la destrucción de la estación de Policía, punto de partida del fortalecimiento de los contraestados que se propusieron las FARC-EP en años posteriores, sin embargo en las tomas guerrilleras de 1997 al 2001 esto fue imposible por dos razones: las dificultades de movilidad debido al cerco militar de la Brigada XIII y sus batallones de alta montaña, lo que desencadenó que la guerrilla, en retaliación, aplicara violencia poco dosificada contra las instituciones del Estado; y el vacío político a raíz de la ausencia de líderes afectos a la causa guerrillera, de modo que su accionar estuvo más inclinado al aspecto militar que a la orientación política e ideológica.

Buen ejemplo de lo anterior fue la ausencia en la subprovincia de figuras políticas de las FARC-EP como Mauricio Jaramillo, alias “el Médico”; Jairo González, alias “Byron Yepes”; Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”; y Henry Castellanos, alias “Romaña”, quienes para la época se encontraban en la zona de distensión⁹.

Así las cosas, las FARC-EP fueron perdiendo gradualmente poder político, militancia y simpatía en la población del Sumapaz, y la imposibilidad de mantenerse como contraestado les exigió limitarse al boicot y el bandolerismo, principalmente asaltando los bancos de cada municipio y hostigando las estaciones de la Policía Nacional.

El bandolerismo tuvo la intención de capturar las rentas legales e ilegales del territorio y, a la par, evadir la ley por medio de la presión a servidores públicos y el boicot a instituciones de nivel local. En suma, la exacerbación de la violencia manifestada en las tomas de 1997 a 2001

9 Fue un área del territorio colombiano compuesta por los municipios de San Vicente en el Caquetá, y La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vistahermosa en el Meta, otorgada a la guerrilla de las FARC-EP para su desplazamiento y estadía. Dicha área estaba exenta de la acción de la institucionalidad militar y tuvo un periodo de existencia de octubre de 1998 hasta inicios del 2002.

en San Bernardo, Cabrera, Venecia y Arbeláez estuvo motivada más por la demostración de su presencia que de control.

Así las cosas, el ejercicio de la violencia en la subprovincia por parte de las FARC-EP se desarrolló en virtud de controlar militar y políticamente el territorio. Sin embargo, el control militar estaba en decaída y el control político se limitó a prohibir la participación en las elecciones a las corporaciones públicas de 1997 (*El Tiempo*, 1997), orden que se cumplió parcialmente, pues en el municipio de Venecia el abstencionismo fue total; en Pasca el alcalde fue elegido con 116 votos, cuestión totalmente atípica en un municipio que normalmente elegía con más de 1500 votos (Registraduría Nacional del Estado Civil, 1997); y en Cabrera el alcalde Néstor Morales Piñeros, del Partido Unión Patriótica, fue elegido con normalidad. Ya en ejercicio de sus funciones, las presiones hacia la Administración de Morales Piñeros en demanda de combustible y dinero eran constantes, pero al no sentirse atendida en sus peticiones, la guerrilla declaró objetivo militar a la Alcaldía y al alcalde (Alias “María Eugenia”, 2017).

Al tiempo que aumentó la intensidad de los combates en las zonas rurales de la subprovincia, líderes locales eran blancos de amenazas por parte de las FARC-EP. Ejemplo de ello fue el secuestro del alcalde electo para 1998-2000, Carlos Humberto Chitiva Molina; el personero municipal, Jairo Enrique Arias; y algunos concejales del municipio de Pasca (*El Tiempo*, 1998).

La anterior situación puede explicarse desde tres puntos de vista de las FARC-EP: el boicot de elecciones y secuestro de funcionarios públicos, que fue una tendencia a nivel nacional (Pécaut, 2008); la iniciativa de *representación embrionaria* en el nivel regional y local arbitrando las relaciones entre el Estado y la sociedad (Uribe, 2001, p. 263); y una disonancia cognitiva que las llevó a convencerse de tener el monopolio de la violencia y el poder, cuando en la práctica no era así.

En concordancia con la sistemática pérdida de poder de las FARC-EP en el Sumapaz, sus acciones militares y ofensivas fueron disminuyendo al punto de reducirse a algunas escaramuzas y enfrentamientos rurales que rompían con el curso normal de la retoma del orden público por parte del Estado. En su defecto, intentaron acudir a la utilización de “repertorios violentos”, como boleteos y rumores de tomas guerrilleras, paros armados y amenazas para no evidenciar el deterioro en la presencia armada (Aguilera y otros, 2016), pero dichos rumores fueron gradualmente perdiendo influencia y credibilidad en la población civil.

Por otro lado, a finales de los años noventa, las estructuras armadas de las FARC-EP que operaban en la subprovincia se aglutinaron en estructuras móviles y de mayor tamaño, como las columnas Teófilo Forero, Reinel Méndez, el Frente Abelardo Romero y el Frente Joaquín Ballén (Ávila, 2011). El *Plan de guerra* de las FARC-EP, como lo ha señalado Aguilera (2013), generó que estas estructuras concentraran toda su atención en aumentar el secuestro en las vías de comunicación y causar la percepción de condiciones preinsurreccionales.

Las anteriores estructuras móviles de las FARC-EP se replegaron en los años noventa en el sur del país y la cordillera Oriental para tomarse el casco urbano de municipios como Vistahermosa (Meta), San Miguel (Putumayo), Une (Cundinamarca), Mitú (Vaupés) y Milán (Caquetá), desplazando así el teatro de operaciones de la guerra (Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, 2012).

Es por ello que, para la época de mayores combates entre las FARC-EP y el Ejército Nacional en zonas rurales, se incrementaron los hostigamientos a los cascos urbanos desde las montañas, el boleteo a personajes que abiertamente mostraban antipatía hacia este grupo guerrillero, rumores de tomas guerrilleras y paros armados en los diferentes municipios. En otras palabras, las FARC-EP giraron hacia un mayor uso de

la violencia indiscriminada, menor dirección organizacional y menor capacidad para despertar simpatías políticas.

Finalmente, el apogeo de las FARC-EP en la subprovincia se debió, por un lado, a los golpes contundentes que recibió el Bloque Oriental en diferentes lugares, en especial en la subprovincia del Sumapaz, pues para finales de los noventa estas estructuras no tenían el mismo poder de los años anteriores; no hay que olvidar que desde 1997 en adelante el departamento de Cundinamarca fue robusteciendo las instituciones militares en el Sumapaz (CAR Cundinamarca, 2018). Por otro lado, las buenas relaciones y la adhesión social de la población de la subprovincia a las FARC-EP, para finales de los años noventa e inicios del siglo XXI estaban quebrantadas.

Así las cosas, la supervivencia de las FARC-EP en la subprovincia estuvo lesionada, ya que las estructuras diezmadas del Bloque Oriental fueron atacadas inmediatamente por parte del Estado colombiano con la operación Aniquilación II¹⁰. La persecución del Ejército Nacional hacia las FARC-EP cortó casi definitivamente con el corredor estratégico del Sumapaz no solo persiguiendo a los guerrilleros, sino capturando y hostigando a la población civil en los territorios de Las Águilas, la Localidad 20 de Bogotá y las veredas colindantes con el páramo de Sumapaz (*El Tiempo*, 2000).

A pesar de lo anterior, la presión dirigida a las FARC-EP en la subprovincia no logró vaciar el territorio de subversión ni consolidar localmente al Estado, por el contrario, la región vivió una de sus peores etapas por causa de rumores de paros armados y de tomas guerrilleras, incremento de la extorsión, aumento de vacunas y nuevamente violencia indiscri-

10 Fue desarrollada en el año 2000 en contra de las estructuras de las FARC-EP que se encontraban en inmediaciones al páramo de Sumapaz, por más de 4000 militares, con el apoyo de helicópteros artillados, artillería pesada y tanques Cascabel.

minada (*El Tiempo*, 2000). Si bien estos repertorios no clasifican como violencia “letal” como los asesinatos o masacres, sí mantienen entre la zozobra y el miedo a la comunidad, a la par que alejan la movilidad económica (Inspección de Policía de Cabrera, 2017).

En síntesis, la anterior situación, propiciada por la sobreutilización de los repertorios violentos en la subprovincia, generó que en el territorio para los años 2000-2003 se desarrollara una “anarquía criminal”¹¹, es decir, un brote de criminalidad con motivaciones mayoritariamente económicas, que se disparó en los municipios de Pasca, Arbeláez, Cabrera, Venecia y San Bernardo, proveniente de delincuentes natos que aprovechaban el contexto para extorsionar y secuestrar, de algunos milicianos que capturaban rentas ilegales para su economía privada y de guerrilleros de las FARC-EP que tenían más motivaciones económicas que intereses ideológicos y políticos.

Para finales de los años noventa la avaricia económica de militantes y simpatizantes de la organización generó la eclosión de acciones de indisciplina dentro de las FARC-EP: en las fiestas, con poca prudencia, se permitía la fuga de información interna; en reuniones con prostitutas se perdía autoridad ante la población; y los abusos sostenidos del mando con la población civil no tuvieron castigo por parte de comandantes guerrilleros de mayor rango, todo lo cual generó más fracturas en la adhesión de la población con esta guerrilla (Suacha, 2017).

Por otro lado, la operación Aniquilación II fue un golpe militar contundente, pues, entre otras cosas, la arremetida del Ejército, la Policía Na-

11 Según Ariel Ávila y León Valencia (2017), las anarquías criminales son fenómenos políticos en los que diferentes actores armados ilegales se disputan vacíos de poder de actores armados ilegales que ejercían el monopolio de la violencia en un territorio. En este caso, este se produjo en territorios donde las FARC-EP, a la par de ejercer acciones criminales como extorsiones, reclutamientos, combates y demás, ejercían también acciones de regulación social en materia ambiental, seguridad, justicia y convivencia.

cional y la Fuerza Aérea llevó a la subversión a marginarse y actuar con poca precisión y selectividad en la violencia. Inclusive, para la época, el comercio en muchas ocasiones tuvo que cerrar sus puertas debido a las amenazas, los servicios públicos fueron suspendidos, los horarios para movilizarse en los municipios fueron restringidos y finalmente los servidores públicos cesaron sus actividades (Comerciante de víveres de Pasca, 2017).

Así mismo, varios concejales y alcaldes renunciaron en Cabrera y Pasca, otros tantos fueron amenazados y terminaron sesionando desde municipios cercanos como Fusagasugá. Fue así como la Alcaldía de Cabrera terminó siendo administrada desde la Gobernación de Cundinamarca, con sede en Bogotá (Concejo Municipal de Pasca, 2003). Este tipo de situaciones generaban animadversión en la población que necesitada créditos, documentos públicos, servicios sociales estatales, venta de ganado, entre otros trámites, y se veía afectada notablemente por cuenta del cierre, la destrucción o el funcionamiento de las entidades desde otros municipios; no menos desagradado generaba el hecho de que un alcalde o concejal electo popularmente se viera constreñido para cumplir sus actividades en la población.

La anarquía criminal y las limitaciones de gobernabilidad en que se encontraba la subprovincia se manifestó, inclusive, cuando fueron asesinados en confusos hechos el personero municipal de Cabrera, José Joaquín Hernández, y la secretaria de Gobierno, Ana Cornelia Varela, hija del histórico líder agrario del Sumapaz, Juan de la Cruz Varela. Agregado a lo anterior, un número importante de personas de los municipios de Pasca y Cabrera fueron declaradas objetivo militar y posteriormente secuestradas o asesinadas. Estas situaciones, al estar catalogadas como “confusos hechos”, podían estar relacionadas con incursiones paramilitares en el sur del Tolima (Inspección de Policía de Cabrera, 2017). En este periodo de tiempo, la violencia indiscriminada fue constante y

poco evidente su punto de origen, por ello, la obediencia de la sociedad sumapaceña oscilaba entre el Estado y la subversión.

Entre otras cosas, porque para entonces las estructuras de las FARC-EP concentraron sus acciones en atentados clandestinos, de allí que algunas instituciones militares estigmatizaran constantemente a sus simpatizantes, ante la imposibilidad de combatir y capturar a la guerrilla.

Por el año 2001 los frentes 55 y 52 de las FARC-EP realizaron acciones armadas en los municipios de San Bernardo y Arbeláez, lo cual permite identificar dos elementos: que las estructuras que históricamente habían estado en la subprovincia ya no actuaban directamente en la región; y que, si bien causaron daños importantes al casco urbano y robaron dinero de la Caja Agraria, la institucionalidad militar rápidamente retomaba el control de los municipios (*El Tiempo*, 2001).

En el caso de las estructuras militares de las FARC-EP en la subprovincia, vale decir que se encontraban muy lejos de seguir siendo el contrapoder del territorio. La Brigada 13 y otras organizaciones del Ejército Nacional, al dar positivos en muertos y capturas, alejaron a la sociedad de la presencia de los frentes 55 y 52. En el marco del Plan Colombia que se desarrolló en el Sumapaz con la operación Libertad I¹², hubo una gran cantidad de golpes militares hacia las FARC-EP y sus estructuras en el Sumapaz, lo que generó su destierro en el centro del país (Ávila, 2011).

Del mismo modo, pasada la operación Libertad I, varias de las estructuras de las FARC-EP desaparecieron de Cundinamarca y bien se desplazaron hacia el sur del país de manera definitiva o fueron exterminadas. El

12 El 1 de junio de 2003 el gobierno de Álvaro Uribe Vélez lanzó una ofensiva en contra de las estructuras de las FARC-EP que operaban en la región de Sumapaz, Guavio, Rionegro, Oriente, páramo de Sumapaz y territorios del Meta. Esta operación, que comprometió a más de cinco brigadas del Ejército, produjo un gran número de capturas, desmovilizaciones y bajas en combate de las FARC-EP.

Frente Policarpa Salavarrieta, el Frente 54, las columnas móviles Reinaldo Cuellar y Abelardo Romero fueron exterminadas y después del 2007 reconstituidas en las selvas del Vaupés, Guainía y Meta (Ávila, 2009).

Para que se presentara esta serie de golpes militares por parte del Ejército Nacional en el Sumapaz fue necesaria la participación de la población civil, concretamente la *Red de Informantes*¹³ participó activamente en estos. Después del año 2003 el Ejército Nacional logró capturar y asesinar a diferentes líderes guerrilleros que se encontraban en inmediaciones del páramo, detectar “caletas” de armas y dinero, perseguir y capturar a diferentes milicianos y simpatizantes, todo ello de una manera rápida y contundente (Meza, 2021).

No menos importante fue el desplazamiento de las FARC-EP hacia sus retaguardias históricas por acción de los grupos paramilitares (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2018). En el caso de la subprovincia, escalonadamente lo hicieron hacia el páramo de Sumapaz, a raíz del miedo y los asesinatos del paramilitarismo en los municipios de Cunday, Icononzo (CNMH, 2017), Silvania y Fusagasugá (Origua, 2019).

De esta suerte, la historia de las FARC-EP en la subprovincia terminó con un retroceso importante, a pesar de que en los municipios de Venecia, Pasca y San Bernardo volvieron a tener presencia, pero ahora en contingentes muy pequeños y clandestinos. En municipios como Cabrera y la Localidad 20 de Bogotá su accionar fue modesto en los años posteriores a 2004. En síntesis, para finales del 2004 había una reducida presencia e incidencia de las FARC-EP en el Sumapaz (Ávila, 2011).

13 Programa del Ministerio de Defensa en el periodo presidencial de Álvaro Uribe (2002-2006). Inició en el mes de agosto en el departamento del Cesar y con el tiempo fue exportado a los diferentes departamentos del país. Estaba sedimentado en que la población civil cambiara por dinero información que permitiera dar captura a miembros de diferentes grupos armados.

A manera de cierre de la discusión, es posible señalar que de 1997 en adelante el conflicto armado en el Sumapaz tuvo una lógica enfocada en el control del territorio, por tanto, viene bien la citación de fuentes teóricas que explican a partir de este factor el aumento de la intensidad de la violencia y el uso indiscriminado de ella. Según Kalyvas (2010), cuando un actor armado tiene un nivel de control alto en un territorio, recurre poco al ejercicio de la violencia indiscriminada.

Vale decir que en la subprovincia, durante los años 1997-2004, las FARC-EP estuvieron convencidas de la fidelidad política de la población, pero la presencia constante de la Policía y el Ejército Nacional en el territorio también fue generando adhesiones sociales a su favor, estimuladas además por sus acercamientos a la comunidad en festividades como la Navidad, el Día de las Brujas, o en actividades como funciones de circo, bazares, fiestas populares y partidos de microfútbol, que permitieron el inicio de amistades e inclusive relaciones amorosas. Así pues, la adhesión de la población civil con los diferentes actores armados no fue estática en el tiempo.

Por otro lado, Kalyvas (2010) señala que el uso de la violencia indiscriminada genera poca claridad en la población civil sobre los comportamientos desviados que debe modificar. En el caso de la subprovincia del Sumapaz, esta fue sostenida durante los años 1997-2004 contra el casco urbano de los municipios y la población, lo que generó que se despertaran enemistades y antipatías contra las FARC-EP y la adhesión progresiva a las fuerzas militares estatales.

En síntesis, el conflicto social armado en la subprovincia del Sumapaz, entre 1997 y 2004, tuvo cuatro particularidades que se pueden caracterizar de este modo:

La apropiación del territorio por parte de las FARC-EP desde una lógica militar, y la pretensión de “asfixiar” a Bogotá desde las diferentes zonas

colindantes con la cordillera Oriental con el apoyo de la población civil, para lo cual estaban dispuestas a dejar en un segundo plano el mejoramiento de las relaciones con la comunidad. A contracorriente, por los años 1990-1996 la finalidad de la inserción y sostenimiento del conflicto armado obedeció al control de un territorio que les resultaba estratégico porque les permitía mantener un corredor para las estructuras político-militares, por tanto era crucial garantizar apoyos sociales alrededor de Bogotá.

Así mismo, para los años 1997-2004 la subprovincia fue un territorio de órdenes en disputa, donde las FARC-EP y el Estado tensionaron por el control y el monopolio de la violencia, de modo que el orden contraestatal de los años anteriores se redujo, el accionar de la subversión no logró tener una inserción efectiva, y su accionar se limitó casi exclusivamente a una presencia militar discontinua y débil (Vásquez, 2017, p. 154).

El *Plan de toma del poder* para el cual la subprovincia del Sumapaz era la piedra angular de la toma de Bogotá, fue descubierto y contestado militarmente por el Estado con operaciones militares como Libertad I, el cerco militar en el páramo de Sumapaz y el bloqueo del corredor estratégico. Lo anterior explica, en parte, el fracaso de las FARC-EP en su consolidación del *Plan de toma del poder* y su intento constante de recuperar este territorio histórico (Ospina, 2008).

Finalmente es necesario decir que las microviolencias en el Sumapaz desde 1997 fueron profundamente explicativas de la decadencia de las FARC-EP en el territorio. En efecto, las *microviolencias* que operan como elementos conceptuales sobre el desarrollo de la violencia a nivel local presentan dos elementos conceptuales: aquellas que se expresan más allá de las condiciones estructurales que avivan el conflicto; y aquellas que provienen de asuntos internos en la familia, los hogares, los partidos políticos locales y las comunidades (Kalyvas, 2004, p. 56).

Conclusiones

El papel de las FARC-EP entre 1990-2004 tuvo motivaciones económicas y políticas. Hasta 1996 estas se inclinaban hacia lo ideológico-político y la aplicación de la violencia dosificada. Desde 1997 fueron mayoritariamente económicas y una violencia indiscriminada. En virtud de lo anterior, durante los primeros años de los noventa las FARC-EP tuvieron buenas relaciones con la población civil, afianzaron adhesiones sociales y simpatías, y construyeron poderes *contraestatales*. De 1997 en adelante dichas relaciones estuvieron mediadas por la tensión, el miedo y el utilitarismo, y como consecuencia aparecieron las enemistades y rupturas con la población.

El conflicto armado en la subprovincia, por los años noventa, tuvo varios detonantes internacionales, nacionales y regionales, sin embargo, varias particularidades locales determinaron virajes en la guerra: las enemistades, los delatores de la red de informantes, las buenas relaciones de la población con el Ejército y la Policía Nacional, entre otras, son claves para entender este periodo de tiempo. Kalyvas (2010) señala que las *escisiones locales* (micromotivos de la guerra) determinan el curso de la guerra. Dichas escisiones son interdependientes con el curso estructural del conflicto armado, al mismo tiempo que son diversas y van desde factores de financiación de la guerra hasta asuntos personales.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que de 1996 hacia atrás la adhesión social de la población de la subprovincia a las FARC-EP generó relaciones de camaradería, que a largo plazo se tradujeron en apoyo social y antipatía hacia las fuerzas militares. De 1997 al 2004 afloraron *escisiones locales*, producto de la avaricia y el uso de violencia con fines personales por parte de combatientes y milicianos que vieron en el conflicto armado oportunidades de acumulación económica y de solución a sus problemas personales (Villa, 2017).

El álgido impacto del conflicto armado en la subprovincia del Sumapaz se matizó por la emergencia de intereses personales, lucrativos y criminales por parte de guerrilleros y milicianos de las FARC-EP, los cuales se presentaron con menos intensidad del año 1996 hacia atrás. Ello no quiere decir que de 1997 en adelante dichos intereses fueran la explicación inequívoca de la persistencia del conflicto.

Existe una situación de equilibrio entre oferta y demanda de la violencia. En el caso de la subprovincia, a inicios de los años noventa (1990-1996) dicho equilibrio era evidente, pues las FARC-EP entraban a castigar hechos como robos, extorsiones, abigeato y criminalidad, lo cual era bien visto por parte de la población. A partir de 1997 la demanda de la violencia no era proporcional a la oferta de las FARC-EP, en otras palabras, ahora estos castigos eran mucho más severos y por delitos más simples, lo que generó malestar en la población, especialmente entre familiares y amigos de las personas castigadas.

Bibliografía

- Aguilera, Mario. (2013). Las FARC: auge y quiebre de su modelo de guerra. *Análisis Político*, 26(77), 85-111.
- Aguilera, Mario; Vargas, Alba Lucía; Marulanda, Luisa y Sánchez Luis Fernando. (2016). *Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013)*. Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Ávila, Ariel. (2009). Las guerras contra las Farc y las guerras de las Farc. *Revista Semana*.
- Ávila, Ariel. (2011). Bloque Oriental. La nueva forma de operar y el vacío de poder. De la victoria a la derrota. En Carlos Medina Gallego, *Farc-Ep. Flujos y reflujos. La guerra en las regiones* (pp. 165-205). Universidad Nacional de Colombia.
- Beltrán, Santos Alonso. (2009). FARC-EP una reflexión sobre su organización política y militar. En Carlos Medina, *Farc-Ep: temas y problemas nacionales 1958-2008* (pp. 72-102). Universidad Nacional de Colombia.

- Beltrán, Santos Alonso. (2011). Actor armado, territorio y población. Las lógicas de la guerra irregular. En Carlos Medina Gallego, *Farc-Ep. Flujos y reflujos. La guerra en las regiones*. (pp. 17-41). Universidad Nacional de Colombia.
- Bustamante, Fernando. (1990). La política de Estados Unidos contra el narcotráfico y su impacto en América Latina. *Estudios Internacionales*, 23(90), 240-271.
- Cadena, José Luis. (2002). La geografía y el poder. Territorialización del poder en Colombia. El caso de las FARC – De Marquetalia al Caguán. *Perspectiva Geográfica*, (8), 7-30.
- Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2013). *¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). *Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). *De los precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe N.º 1*. CNMH.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). *Paramilitarismo: balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento del conflicto*. CNMH.
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (junio de 2007). *Condenado el departamento de Cundinamarca por los hechos de la hacienda Bellacruz*. <https://www.colectivodeabogados.org/CONDENADO-EL-DEPARTAMENTO-DE>
- Collier, Paul y Hoeffler, Anke. (2004). Greed and grievance in civil War. *Oxford Economic Papers*, 56(4), pp. 563-595.
- Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca [CAR]. (2018). *Pilares del Plan de Acción 2016-2019*. CAR.
- Corporación Nuevo Arco Iris. (2007). *Monografía político electoral: departamento de Cundinamarca 1997-2007*. Misión de Observación Electoral/Universidad de los Andes.
- De Rementería, Ibán. (1996). La descertificación de Colombia y la certificación del Perú. *Análisis Político*, (27), 58-61.

- Ejército Nacional de Colombia. (s.f.). *Génesis de las Farc-Ep: Tomo XVI. Planes Bloque Oriental Farc-Ep*. Ejército Nacional de Colombia.
- García, Diego Alejandro. (2017). *Identidad territorial en el Sumapaz: de organizaciones sociales a laboratorios educativos*. Universidad La Gran Colombia. https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/5479/Identidad_territorial_Sumapaz_organizacionesociales.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Garzón, Laura María. (Septiembre de 2011). *Análisis de los tres principales objetivos estratégicos de la política de seguridad democrática: consolidación del control estatal del territorio, confianza inversionista y cohesión social (2002-2010)* [Tesis de pregrado, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario].
- Gilhodes, Pierre. (1974). *Las luchas agrarias en Colombia*. La Carreta.
- González, José Jairo. (1992). *Espacios de exclusión: el estigma de las Repúblicas independientes 1955-1965*. Centro de Investigación y Educación Popular.
- Kalyvas, Stathis. (2004). La ontología de la “violencia política” acción e identidad en las guerras civiles. *Análisis Político*, (52), 51-76.
- Kalyvas, Stathis. (2010). *La lógica de la violencia en la guerra civil*. Akal.
- Leal, Francisco. (1994). Nuevos temas para la agenda de seguridad nacional gobierno de César Gaviria Trujillo, 1990-1994. En Francisco Leal, *El oficio de la guerra. La seguridad nacional en Colombia* (pp. 75-106). Universidad Nacional de Colombia.
- Londoño, Rocío. (2011). *Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984)*. Universidad Nacional de Colombia.
- Medina, Carlos. (2009). *Farc-Ep. Notas para una historia política 1958-2996* [Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Colombia].
- Marulanda, Elsy. (1991). *Colonización y conflicto: las lecciones del Sumapaz*. Universidad Nacional de Colombia.
- Molano, Alfredo. (2016). *A lomo de mula*. Aguilar.

- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2006). *Dinámica reciente de la confrontación armada en Cundinamarca*. Vicepresidencia de la República.
- Ospina, Carlos. (15 de marzo de 2008). La derrota de la FARC. *Regional Insights*. Center for Hemispheric Defense Studies, 1-6.
- Palacios, Marco. (1986). *El café en Colombia, 1850-1970 una historia económica, social y política*. El Colegio de México.
- Pécaut, Daniel. (2008). Las FARC: fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohesión. *Análisis Político*, 21(63), 22-50.
- Peña, Carina. (1997). La guerrilla resiste muchas miradas. *Análisis Político*, (32), 96-98.
- Tirado, Nancy. (1990). *El Plan Nacional de Rehabilitación: un modelo institucional para la democracia participativa, la descentralización y la lucha contra la pobreza*. Fedesarrollo.
- Tobón, Gilberto. (2001). Estado, política y clases sociales en Colombia. En Gilberto Tobón, *Estado, política y economía en Colombia* (pp. 245-441). Señal Editora.
- Uribe, María. (2001). *Nación, ciudadanía y soberanía*. Medellín: Corporación Región.
- Varela, Laura María. (2010). *Juan de la Cruz Varela entre la historia y la memoria*. Universidad Antonio Nariño.
- Varela, Laura María y Duque, Deyanira. (Julio-diciembre de 2011). Estrategia de los agrarios de Sumapaz y Oriente del Tolima durante el Frente Nacional. *Historia y Sociedad*, 173-195.
- Vásquez, Teófilo. (2017). Esbozo para una explicación espacial y territorial del conflicto armado colombiano, 1990-2014. En Fernando Cubides, Mauricio Hernández, Jaime Wilches, Ricardo García, Teófilo Vásquez, Omar Gutiérrez, Juan Carlos Sánchez, Ricardo Vargas, Andrés Castiblanco, Claudia Pico, Mauricio Hernández, Andrés Wilches, Absalón Jiménez, Robert Ojeda, Fernando Guerrero, Yanitza Giraldo y Viviana García, *Esta guerra que se va... territorios y violencias; desigualdad y fragmentación social* (pp. 118-192). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Vega, Renán. (2015). Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado. En Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia* (p. 40). Ediciones desde abajo.

Villarraga, Álvaro. (2015). *Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014*. Fundación Cultura Democrática.

Wood, Elisabeth. (2010). Los procesos sociales de la guerra civil: la transformación de redes sociales en tiempos de guerra. *Análisis Político*, 23(68), 101-124.

Tesis

Cadena, José Luis. (1999). *Evaluación de la eficiencia y la eficacia del Ejército de Colombia* [Tesis de Grado para optar el título de Magíster en Ciencia Política, Universidad de los Andes].

Origua, Brayan. (2019). *Historia del conflicto armado en Sylvania Cundinamarca (2000-2005)* [Tesis de Grado, Universidad de Cundinamarca].

Usaquén, Wilmer y Tinjacá, David. (2018). *Conflicto armado y escuela rural en el corregimiento suroriental de Fusagasugá (1990-2003)* [Tesis de Grado, Universidad de Cundinamarca].

Archivos de prensa

El Tiempo. (23 de octubre de 1992). Ataques de la CG a civiles. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-227825>

El Tiempo. (17 de junio de 1992). Develan plan terrorista de las FARC en Cundinamarca. Recuperado de: [ohttps://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-139385](https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-139385)

El Tiempo. (27 de agosto de 1994). Caen 5 guerrilleros en Cabrera. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-201229>

El Tiempo. (07 de abril de 1995). Campamento de las FARC cayó en Pasca. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-310917>

El Tiempo. (04 de junio de 1995). La guerrilla metió sus milicias en Bogotá. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-338333>

El Tiempo. (06 de octubre de 1996). FARC había amenazado al párroco de Venecia. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-528259>

El Tiempo. (23 de octubre de 1997). FARC prohíben elecciones en 23 municipios. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-679547>

El Tiempo. (15 de enero de 1998). Sin rastro del alcalde de Pasca. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-789037>

El Tiempo. (03 de enero de 2000). Extorsión azota a Cundinamarca. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1278441>

El Tiempo. (01 de octubre de 2000). La reconquista del Sumapaz. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1223722>

El Tiempo. (20 de junio de 2001). FARC atacaron a Arbeláez. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-486311>

Verdad Abierta. (s.f.). *Los frentes y las columnas del bloque oriental. verdadabierta.com*. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/images/Especiales/bloque-oriental-farc/estructura/index.html>

Verdad Abierta. (24 de febrero de 2016). Las tomas de las FARC en Cundinamarca. *verdadabierta.com*. Recuperado de: <https://verdadabierta.com/las-tomas-de-las-farc-a-cundinamarca/>

Archivos locales

Asamblea de Cundinamarca. (1996). *Archivos de la Asamblea de Cundinamarca, Tomo III- folio 116*. Gobernación de Cundinamarca.

Concejo Municipal de Pasca. (20 de enero de 2003). *Archivos del Concejo Municipal de Pasca. Acta 08 del folio 20*.

Inspección de Policía de Cabrera. (2017). *Cese de actividades en el 2002*. Cabrera.

Bases de datos

Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. (2012). *Ataques a poblaciones 1988-2012*. <https://www.rpubs.com/Oriojas/Conflicto>.

Registraduría Nacional del Estado Civil. (1997). *Estadísticas electorales 1997-1998*. Gobernación de Cundinamarca.

Entrevistas

Alias “María Eugenia”. (17 de febrero de 2017). Exmilitiana de las FARC-EP en los municipios de Cabrera y Venecia; funcionaria del municipio de Cabrera para los años 1995-1999/Entrevistada por Jorge Andrés Baquero.

Comerciante de víveres de Pasca. (19 de junio de 2017). Impacto del conflicto armado a la economía del Sumapaz/Entrevistado por Jorge Andrés Baquero.

Firacative, Pedro. (18 de abril de 2019). Presidente de junta de acción comunal de una vereda de la subprovincia/Entrevistado por Jorge Andrés Baquero.

Funcionaria Pública de Cabrera. (21 de febrero de 2019). El desarrollo del conflicto armado en el municipio de Cabrera y el papel del Frente 25/Entrevistada por Jorge Andrés Baquero.

González, Jairo. (16 de junio de 2017). Testimonio de excomandante de las FARC-EP, exmiembro del Frente 55/Entrevistado por Jorge Andrés Baquero.

Martínez, Fáber. (20 de marzo de 2017). Líder de junta de acción comunal del Sumapaz, Impacto del conflicto armado en las juntas comunales/Entrevistado por Jorge Andrés Baquero.

Meza, Antonio. (2 de diciembre de 2021). Exmilitiano de las FARC-EP desde los años ochenta en el páramo de Sumapaz, capturado en 2003 y miembro de la red de informantes del Ejército Nacional desde 2004/Entrevistado por Jorge Andrés Baquero.

Murillo, Pablo. (20 de mayo de 2017). Testimonio de guerrillero de las FARC-EP sobre el conflicto armado en el Sumapaz/Entrevistado por Jorge Andrés Baquero.

Riveros, Genaro. (20 de noviembre de 2016). Profesor de San Juan Sumapaz/
Entrevistado por Jorge Andrés Baquero.

Sánchez, Ernesto. (17 de julio de 2019). Testimonio del comerciante de gana-
do bovino en la subprovincia del Sumapaz/Entrevistado por Jorge Andrés
Baquero.

Suacha, Rubi. (4 de diciembre de 2017). Testimonio de exmiliciano de las FARC-
EP del municipio de Cabrera/Entrevistado por Jorge Andrés Baquero.

Villa, Pablo. (13 de octubre de 2017). Miliciano de las FARC-EP veredas el Salitre
y El Dorado. Presencia e influencia de las auxiliadoras de las FARC-EP en
Pasca, Cundinamarca/Entrevistado por Jorge Andrés Baquero.